

REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL *

PILAR RODRIGUEZ-TOQUERO Y RAMOS

Subdirectora de Propiedad Intelectual
Ministerio de Educación y Cultura

INTRODUCCION

El Libro III del Texto Refundido de la Ley, de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que se rotula «De la protección de los derechos reconocidos en la Ley» dedica su título II al Registro de la Propiedad Intelectual.

Antes de hacer mas comentarios al mismo, hay que aclarar que se trata de un mecanismo administrativo de tutela de los derechos de Propiedad Intelectual añadido a los instrumentos judiciales previstos en la Ley y cuyo núcleo de protección radica en el carácter público del mismo, así como en la presunción salvo prueba en contrario, de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en los asientos respectivos.

ANTECEDENTES

La Ley de 10 de junio de 1847 creó en el Ministerio de Fomento un registro que consistía en un «Libro talonario» donde por orden de fechas se anotaban las obras presentadas a tal efecto.

La centenaria Ley de 1879 dedicaba varios artículos al Registro. Según dicha ley, para gozar de los beneficios concedidos por ella,

* Ponencia comunicada en las jornadas acerca de nuevas perspectivas sobre propiedad intelectual, el 2 de junio de 1998, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.

era necesario inscribir la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual; si en el plazo de un año no se inscribía, ésta pasaba provisionalmente a dominio público y podía ser publicada por el Estado, las corporaciones científicas y los particulares durante diez años; si pasaba un año más después de los diez, sin que el autor ni sus derechohabientes la inscribiera, ésta entraba definitivamente al dominio público. La referida inscripción, revestía el carácter de constitutiva, es decir, el derecho nacía por inscribir, aunque un sector de la doctrina y, muy especialmente, José María Chico, indicaban que dicha ley partía de una inscripción «estimulada». Pues dicha ley reconocía que la creación daba vida a la propiedad intelectual y que desde la creación de la obra existía dicho derecho.

La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, nos lleva a hablar de un Registro meramente declarativo de derechos; y para ello basta observar, por un lado, el principio recogido en su artículo 1: «La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el sólo hecho de su creación» y, por otro, su propia exposición de motivos, donde textualmente se indica que «si bien el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual no está sujeto a requisitos formales de ningún tipo, la ley faculta a los titulares de los mismos para que, como medida especial de protección y salvaguarda, proceda a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual».

La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, dedicaba sus artículos 129 y 130 al Registro de la Propiedad Intelectual; ambos se vieron afectados por la reforma producida en el año 1992.

La modificación operada en el artículo 129, a consecuencia de la Ley 20/1992, de 7 de julio, supuso pasar de un modelo registral centralizado a otro descentralizado, manteniéndose el carácter de registro único, pero permitiendo que las Comunidades autónomas con competencia en la materia de propiedad intelectual, determinen la estructura y funcionamiento del Registro en sus respectivos territorios, los cuales no se limitarán a efectuar una mera toma de razón de las solicitudes de inscripción, sino que asumirán su llevanza.

La razón a grande rasgos de dicha reforma, se debió a un asunto que podríamos calificar de «político». En 1988 se interpusieron por parte de los gobiernos autonómicos de Cataluña y País Vasco, sendos recursos de inconstitucionalidad a los artículos que establecían las competencias del extinguido Ministerio de Cultura —hoy Educación y Cultura— en la materia de vigilancia y tutela de las Entida-

des de gestión alegándose, como razonamiento para ello, que se trataba de competencias autonómicas en cuanto que suponían ejecución de la legislación de propiedad intelectual. En base al mismo razonamiento también se impugnó el artículo referente a la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual y el Gobierno vasco incluyó, dentro del recurso, el artículo 129. A efectos de conseguir el desistimiento de dichos recursos, se dio una nueva redacción al referido artículo 129, reconociéndose competencias registrales a las Comunidades Autónomas; los recursos en cuestión nunca fueron retirados, habiendo recaído sentencia el pasado 13 de noviembre de 1997.

El artículo 130 referido básicamente: 1) al objeto de inscripción. 2) a las actuaciones del Registrador 3) al valor del contenido registral y 4) al carácter del mismo, sufrió la derogación de su numeral 5, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 20/1992, de 7 de julio, ya citada, que así lo estableció expresamente; en dicho punto se indicaba que tanto el procedimiento de inscripción, así como la estructura y funcionamiento del Registro, se determinarían reglamentariamente. La razón de dicha derogación se debió sin más a que ya se hacía referencia a ello, al darle nueva redacción al artículo 129.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL

Nuestra vigente norma, como ya he mencionado en la introducción, dedica el Título II de su Libro III, al Registro de la Propiedad Intelectual; dicho Título está integrado por dos artículos, al día de hoy, desde la entrada en vigor de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, el 144 y el 145; su tenor literal es idéntico a los ya comentados artículos 129 y 130 de la ya derogada Ley 22/1987, de 11 de noviembre.

LA INSTITUCION REGISTRAL

1. *¿Qué naturaleza tiene este Registro?; ¿es un registro jurídico o es simplemente administrativo?*

Soy de la opinión que no se le puede negar cierta naturaleza jurídica, pues el artículo 145, ya mencionado, establece que el Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los ac-

tos y contratos relativos a derechos inscribibles; y, por supuesto, que esa calificación abarca extremos que van desde la capacidad, representación, requisitos de forma y fondo de las solicitudes hasta la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos; lo que conlleva un cierto carácter jurídico.

2. *Objeto de la inscripción*

Se inscriben derechos de Propiedad Intelectual de obras y producciones protegidas por la Ley; recuérdese que la legislación anterior hablaba de inscripción de obras. La formula empleada por la Ley es amplia, pues, al hablar de derechos de propiedad intelectual, abarca a los que pueda ostentar el autor y sus sucesores así como los adquirentes por transmisión inter-vivos. Luego más adelante haré una referencia a la problemática de las anotaciones.

3. *Principios que lo rigen*

- a) Todos los principios que se recogen a continuación están intrínsecamente formulados en el artículo 145, ya varias veces citado, y son los siguientes:

Principio de voluntariedad (punto 1 del artículo 145): El Registro es voluntario y va unido a la actuación «rogada» del Registrador, al que hay que pedir la inscripción, éste no actúa de oficio. Así, la Ley indica que *podrán* ser objeto de inscripción, es decir, no se manifiesta con un término imperativo.

- b) *Principio de calificación* (punto 2 del artículo 145): El Registrador califica las solicitudes y la legalidad de los actos o contratos relativos a los derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de los asientos. Llama la atención que luego se indique que contra el acuerdo del Registrador pueden ejercitarse directamente ante la Jurisdicción civil las actuaciones correspondientes de lo que parece desprenderse que se rechaza el recurso administrativo o gubernativo; para luego ser adecuado el procedimiento contenido en el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- c) *Principio de presunción de certeza* (punto 3 del artículo 145): El contenido del asiento registral se presume exacto, pues los derechos que en el mismo se inscriben se presumen que existen y que pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo. Es una presunción positiva, por lo que el que figura como autor o titular en el correspondiente asiento registral deberá ser demandado.
- d) *Principio de publicidad* (punto 4 del artículo 145): El Registro es público, o mejor dicho el asiento registral es público, por lo que esa referencia que hace el artículo 145 al artículo 101 que trata de programas de ordenador, es totalmente confusa en el sentido de que el asiento registral no refleja argumentos de obras sino datos de inscripción.

REGLAMENTOS ACTUALES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En cumplimiento del numeral 5 derogado por la Ley 20/1992 del art. 130 de la Ley 22/1987, que establecía que reglamentariamente se determinará el procedimiento de inscripción así como la estructura y funcionamiento del Registro; se procedió a la aprobación del Real Decreto 1584/1991 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Dicho Real Decreto, derogado por el Real Decreto 733/1993 de 14 de mayo, que entró en vigor el día 1 de marzo de 1994 y que aprueba un nuevo Reglamento del Registro, derivado de la modificación operada en el art. 129 de la Ley 22/1987 por la Ley 20/1992, de 7 de julio, sigue aplicándose en virtud del punto tercero de la disposición transitoria única de ese Real Decreto 733/1993 que indica: Hasta la entrada en funcionamiento del Registro territorial a que se refiere el apartado anterior, las funciones registrales seguirán ajustándose a las disposiciones del Real Decreto 1584/1991 por el que se aprobó el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Es decir, que al día de hoy, al haberse solamente creado el Registro territorial de Cataluña, por Orden de 4 de abril de 1996, este Real Decreto 733/1993, todavía tiene una vigencia parcial *salvo para los autores y titulares de derechos domiciliados en Cataluña* y para las personas o entidades que, careciendo de domicilio en España, eligieran registrar en el Registro territorial de Cataluña siempre y cuando se tratara de la primera inscripción o sucesivas siguiendo el tracto de ésta. Para el resto, el Real Decreto 1584/1991, derogado, tiene una plena aplicación, aunque con carácter transitorio.

Por ello nos vamos a centrar primeramente en el Reglamento del Registro aprobado por el Real Decreto 1584/1991 de 18 de octubre, que entró en vigor el día 9 de noviembre de 1991 y que, hoy por hoy, se aplica en la mayoría de los supuestos registrales.

A) ANALISIS DEL REAL DECRETO 1584/1991 DE 18 DE OCTUBRE

1. *Estructura y competencias*

El Registro General contemplado, dependía del Ministerio de Cultura —hoy Ministerio de Educación y Cultura— y funcionaba de forma centralizada, es decir, un único Registrador; el Registrador General, calificaba las solicitudes así como la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, inscribía, suspendía o denegaba las inscripciones con competencia en todo el territorio nacional. A ello hay que añadir que en todas las capitales de provincia existen unas oficinas provinciales llamadas por costumbre Registros provinciales, a los solos efectos de recepción y tramitación de las solicitudes de inscripción.

Al día de hoy y dado que el Registro territorial de Cataluña comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1996, el Registrador General tiene competencias en todo el territorio nacional, salvo en Cataluña y las oficinas provinciales, salvo las propias de Cataluña, siguen remitiendo las correspondientes solicitudes de inscripción para su calificación a este extinguido Registro General.

Por otro lado, el Registrador General tiene competencias para emitir informes en materias propias cuando para ello es requerido por Juzgados, Tribunales u organismos públicos. Certifica y elabora notas informativas sobre los asientos registrales que le pertenecen, ya que éstos son públicos, aunque la consulta directa de los expedientes archivados en el Registro, solamente es factible al titular del derecho o a aquel que acredite un interés legítimo.

El Registro tiene una división en secciones, según las clases de obras, actuaciones y producciones objeto de propiedad intelectual; estas secciones van de la I a la VII para las distintas clases de obras y de la VIII a la XI para las actuaciones y producciones; en concreto dichas secciones son las siguientes:

- Sección I:** Para las obras literarias y científicas en cualquiera de sus modalidades, con excepción de las incluidas en la Sección III.
- Sección II:** Para las composiciones musicales, con o sin letra.
- Sección III:** Para las obras dramáticas, dramático musicales, coreografías, pantomimas y, en general, las obras teatrales.
- Sección IV:** Para las obras y producciones audiovisuales.
- Sección V:** Para las esculturas, obras de dibujo, pintura, grabados y litografías y demás obras plásticas, tebeos y «comics», así como las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- Sección VI:** Para proyectos, planos, maquetas y diseños de obras de arquitectura o ingeniería, así como los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y la ciencia.
- Sección VII:** Para los programas de ordenador.
- Sección VIII:** Para las actuaciones de artistas, intérpretes o ejecutantes.
- Sección IX:** Para las producciones fonográficas.
- Sección X:** Para las meras fotografías.
- Sección XI:** Para determinadas producciones editoriales (las del art. 129 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).

Aunque el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1584/1991, indica que cada sección podrá contar según su naturaleza con una subsección para obras y producciones no divulgadas, no existen dichas subsecciones; téngase en cuenta que analizamos una norma que aunque su disposición final, facultaba al Ministro de Cultura para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la misma; no se dictó ninguna, pues el desarrollo legislativo ha ido por otros derroteros (modificación del art. 129 de la Ley 22/1987 en 1992, aprobación de un nuevo Real Decreto con otro Reglamento...)

2. *Otros principios que intervienen en las inscripciones*

Aparte de los ya indicados al comentar el art. 145 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual deben destacarse los siguientes:

a) *Tracto sucesivo*: A él hace referencia el artículo 8 del Reglamento que se comenta, que dice lo siguiente:

1.º) Para inscribir actos o contratos por los que se transmiten, modifican o extinguen derechos de propiedad intelectual deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho del transmitente salvo en el supuesto de productores de obras audiovisuales y de los editores de publicaciones periódicas.

2.º) Cuando dicha inscripción previa no exista el solicitante deberá acreditar fehacientemente que la persona de quien trae su derecho lo adquirió en virtud de documento público.

Este segundo apartado desde mi punto de vista, es de imposible cumplimiento en los supuestos de que se traiga el derecho del propio autor en cuanto titular originario y éste acogándose a la voluntariedad del Registro no inscriba.

b) *Necesidad de documento público para la inscripción de actos y contratos objeto de Registro*: El artículo 6 del Reglamento indica que los actos o contratos objeto de Registro sólo podrán ser inscritos o anotados en virtud de documento público, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial.

c) *Efectos de la inscripción desde la presentación de la solicitud con ciertas matizaciones*: A este principio hace referencia el artículo 7 del Reglamento que establece lo siguiente:

- Se considera como fecha de la inscripción, para los efectos que ésta deba producir, la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que ésta reúna los requisitos esenciales previstos en el Reglamento.
- Para determinar la preferencia entre dos o más inscripciones de igual fecha, relativas a una misma obra, producción o actuación, se atenderá a la hora de la presen-

tación en la oficina provincial de la solicitud respectiva, acompañada de la documentación necesaria.

3. *¿Quiénes pueden solicitar inscripciones?*

El artículo 5 del Reglamento indica que están legitimados para solicitar las inscripciones, bien por sí mismos o a través de sus representantes:

- 1.º) Los autores y demás titulares originarios de derechos de Propiedad Intelectual con respecto a la propia obra, actuación o producción.
- 2.º) Los sucesivos titulares de derechos sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8.2 (recordemos que este punto indica que: cuando dicha inscripción previa no existe el solicitante deberá acreditar fehacientemente que la persona de quién trae su derecho lo adquirió en virtud de documento público).
- 3.º) Los productores de obras audiovisuales y los editores de publicaciones periódicas, siempre que acrediten de forma fehaciente mediante documento público la adquisición de su derecho.

4. *Solicitudes de inscripción*

- a) *Forma y lugar de presentación:* Indica el artículo 13 del Reglamento que nos ocupa que se presentarán en impreso oficial en las oficinas provinciales. Estas harán constar la fecha, hora y minuto de la presentación y verificarán si se acompaña la documentación expresada en aquella. Las oficinas provinciales, salvo actualmente las de Cataluña, remiten al Registro General, las solicitudes y documentación correspondiente. (Indica la normativa que la remisión se hará en el plazo máximo de 7 días, aunque en la práctica se hace en los primeros días del mes siguiente al que se presentaron, salvo en el caso del Registro u Oficina Provincial de Madrid que está ubicado físicamente en los locales del Registro General.
- b) *Datos de las solicitudes:* En el caso de obras es necesario cumplimentar unos datos generales con independencia del

tipo de obra, es decir con independencia de su sección de encuadre —recordemos que para las obras las secciones van de la I a la VII inclusive— y unos datos específicos según la correspondiente sección.

Estos datos generales se cumplimentan en el modelo A común para las ya citadas secciones y son a grandes rasgos los siguientes: Datos identificativos del solicitante, título de la obra cuyos derechos de propiedad intelectual se pretenden inscribir, datos identificativos del autor o autores de la misma, datos identificativos del titular o titulares de los derechos de explotación, indicación de si la obra está divulgada o no y en caso positivo lugar y fecha de la divulgación.

En cuanto al modelo accesorio para las diferentes secciones, los datos o elementos materiales a aportar varían, con ello se trata de obtener una descripción o identificación de la obra, producción o actuación, a veces y desde mi punto de vista, no de una forma afortunada y baste para ello a modo de ejemplo citar los siguientes casos:

- a) Para la descripción o identificación de las obras comprendidas en la Sección I —obras literarias o científicas en cualquiera de sus modalidades, con excepción de las incluidas en la Sección III— si se tratara de una obra divulgada, establece el referido Reglamento que se indicará el número de Depósito Legal y de ISBN; lo que es imposible de aportar si la divulgación se ha realizado de forma diferente a la publicación; yo cuando acabe de comunicar esta ponencia la habré divulgado y si tuviera la voluntad de registrarla mañana, no podría aportar los datos señalados anteriormente.
- b) Para la descripción o identificación de las obras comprendidas en la Sección VII —programas de ordenador— si se tratara de programas divulgados permite el Reglamento que se comenta, que se describan los mismos mediante la presentación de las diez primeras y últimas hojas del código fuente; con lo que no se habrá conseguido una buena identificación, ya que las referidas hojas suelen ser coincidentes en la mayoría de los programas de ordenador.

Luego, más adelante, indicaré cual es la documentación correspondiente que se exige según los casos de titularidad, originaria o derivativa y cuales son los datos que se inscriben.

5. *Procedimiento de inscripción*

El Reglamento aprobado por el Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, establece un procedimiento de inscripción de sólo cuatro artículos, donde se indica que si el Registrador apreciase una falta subsanable en los documentos presentados para la inscripción lo notificará al solicitante para su subsanación en tres meses. Si transcurridos tres meses desde la fecha de notificación tales defectos no se han subsanado, el Registrador acordará la caducidad del procedimiento y la consiguiente denegación de la inscripción. De ello parece desprenderse que se desconoce que tanto la caducidad como la denegación son formas de terminar un procedimiento administrativo como también lo es, por lo que aquí interesa, el desistimiento.

En lo que respecta a las resoluciones denegatorias del Registrador, destaca la necesidad de su motivación y notificación; lo que es obligatorio en todas las resoluciones denegatorias propias de un procedimiento administrativo.

Este procedimiento administrativo especial, fue adecuado a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por el Real Decreto 1694/1994 de 22 de julio, estableciéndose un plazo de 6 meses para que el Registrador resuelva las solicitudes expresamente; asimismo, reduce el plazo de tres meses para la subsanación de defectos por parte del administrado, a 10 días ampliables a 5 más ya sea de oficio o a petición del interesado y establece un efecto de silencio negativo.

6. *¿Qué documentación hay que presentar con las solicitudes de inscripción con independencia de la que identifica la obra cuyos derechos se pretenden inscribir?*

1.º) Supuesto de autor = titular de derechos de explotación:

Sabemos que el autor es titular originario de los derechos de propiedad intelectual, para ello es suficiente observar el artículo 1 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En estos casos bastará que así se declare en el impreso de solicitud; al figurar alguien como autor, llevará aparejado los derechos morales sobre su obra y también figurará como titular de derechos de explotación de la misma. El 95% de las solicitudes que se presentan en el Registro General responden a este supuesto.

2.º) Hay supuestos donde la titularidad de derechos de explotación derivan de una transmisión y así nos encontramos con los supuestos de:

a) Transmisión mortis causa donde habrá que presentar siempre en original y fotocopia para su cotejo los siguientes documentos:

- Partida de defunción del anterior titular.
- Certificado del Registro de actos de última voluntad.
- Testamento válido o en su caso acta de notoriedad notarial o auto de declaración de herederos.
- En caso de más de un heredero escritura pública notarial de partición y de aceptación de herencia.
- En cumplimiento del artículo 33 de la Ley 29/1987 de 18 de diciembre del Impuesto de sucesiones y donaciones, justificante de que los correspondientes documentos se han presentado a liquidación ante la Hacienda Pública.

b) Supuesto de transmisión inter-vivos:

- Documento público de cesión redactado de conformidad con los artículos 43 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, en su caso, con los específicos de cada contrato (contrato de edición, etc.).
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos documentados, deberá presentarse, además, el justificante expedido por la Hacienda Pública de pago exención o no sujeción al referido impuesto.

c) En los supuestos de titularidad de derechos de explotación derivados una relación laboral entre el autor-trabajador y su empresario, interesa conocer y desde luego probar que:

1. El trabajador al momento de crear la obra estaba sujeto a relación laboral con el presunto titular, 2. La creó en sus horas de trabajo y 3. La creó en virtud de una relación laboral. Todo ello con ciertas especialidades para las obras de clase programas de ordena-

dor a partir de la entrada en vigor de la Ley 16/1993, de 23 de diciembre de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

7. Que datos son los que se inscriben

— *Con carácter general:*

- 1.º) Nombre del autor o autores, nacionalidad, D.N.I. y residencia, salvo en el caso de que una obra se divulgue mediante anónimo, seudónimo o signo. En ese caso se hace constar el seudónimo, el signo o que el autor es anónimo. Recuérdese que el uso del seudónimo, anónimo o signo corresponde a una facultad del autor al momento de divulgar su obra (derecho moral).
- 2.º) Titular o titulares de los derechos de explotación con sus específicas condiciones; por ejemplo —en una titularidad derivada de una transmisión mortis causa, se indica si el titular tiene un pleno dominio—, un usufructo o una nuda propiedad, la cuota de cada heredero, la fecha de la transmisión e incluso un extracto o resumen donde se detalla la transmisión.
- 3.º) Título de la obra, especificándose, si los hubiera, sus títulos contenidos.
- 4.º) Datos referentes a si la obra ha sido o no divulgada.
- 5.º) Fecha y hora de presentación. También y aunque no lo establece el Reglamento se hace constar el número de la solicitud y un dígito de la provincia donde se presentó, para facilitar las búsquedas, un número de clave equivalente al número de inscripción definitiva que existía en el procedimiento registral, ya derogado, al que hacía referencia la Orden de 15 de febrero de 1949, un objeto sobre el que giran los derechos de Propiedad Intelectual (por ejemplo, texto adaptado, etc...)

— *Con carácter específico para cada Sección:*

Diversos datos, debiendo destacar que en las secciones I a VII siempre se indica la clase de obra.

8. *En donde se practican los asientos*

El artículo 12 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, indica que éstos se practicarán en libros, cuerpos o soportes materiales apropiados para recoger y expresar, de modo indubitado y con adecuada garantía jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todos los datos que deban constar en el Registro.

Los asientos registrales, confeccionados a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, figuran informatizados, habiéndose empleado para ello la combinación de una base de datos y un procesador de textos.

9. *Problemática de las anotaciones*

El Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, tantas veces mencionado, dedica los artículos 37 y 38 o las anotaciones preventivas; dichos artículos son del tenor literal siguiente:

«Artículo 37. Podrá pedir anotación preventiva de su derecho: 1. El que obtenga a su favor mandamiento judicial ordenando la anotación preventiva de demanda sobre la titularidad de derechos de propiedad intelectual o la constitución, declaración, modificación o extinción de los mismos. 2. El que obtuviera a su favor —un mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en derecho de propiedad intelectual del deudor. 3. El que obtuviera sentencia ejecutoria que, previo los trámites procesales establecidos, pueda hacerse efectiva sobre derechos de propiedad intelectual. 4. El que expresamente estuviera autorizado».

«Artículo 38. 1. Las anotaciones preventivas se extinguen por su cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. La extinción de las anotaciones preventivas puede ser total o parcial. 2. Los plazos de caducidad de las anotaciones preventivas y el procedimiento para su cancelación se regularán por lo establecido en la legislación hipotecaria».

Desde mi punto de vista, la entrada de las anotaciones de embargo en el Registro General de la Propiedad Intelectual en la forma en que están establecidas, es de lo más desafortunada. No debemos olvidar que la *Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión*, atribuye, en sus artículos 68 y 69, la competencia para anotar los mandamientos judiciales de embargo y los de su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen

hipotecario —entre los que se encuentran, por lo que aquí interesa, los derechos de explotación de la propiedad intelectual de una obra— al Registro de la Propiedad de Madrid que determine el Ministerio de Justicia (se determinó que lo fuera el número cuatro de los de dicha capital). Es decir, que la misma competencia la tienen atribuida organismos diferentes —Registro de la Propiedad Inmobiliaria y Registro de la Propiedad Intelectual— a través de normas de distinto rango jerárquico —el primero por ley y el segundo por Real Decreto— sin coordinación entre los mismos, en lo que concierne a la práctica de anotaciones de embargo; lo que podría provocar consecuencias no deseadas. Pensemos, por ejemplo, que sobre los derechos de explotación de una obra determinada, que figuran inscritos en el Registro General de la Propiedad Intelectual, se constituye una hipoteca, la cual se inscribe en el Registro de la propiedad número 4 de Madrid, pero no se practica en el Registro General, antes citado, la anotación a la que se refiere el artículo 76 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 (no se olvide que la falta de toma de razón respecto de la constitución de hipoteca, en este Registro especial, no altera, en ningún caso, los efectos de la inscripción en el Libro de Hipoteca Mobiliaria); que posteriormente el Registrador de la Propiedad Intelectual reciba un mandamiento judicial para que, sobre dichos derechos de explotación, practique una anotación de embargo y certifique las cargas inscritas que afectan a los mismos, resultando negativa la certificación solicitada y que entonces se ejecute el embargo, perjudicándose así al acreedor hipotecario.

B) BREVE ANALISIS DEL REAL DECRETO 733/1993, DE 14 DE MAYO

1. *Consideraciones previas*

Recordemos al respecto, como ya he indicado anteriormente, que este Real Decreto deriva de la modificación operada en el art. 129 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, por la Ley 20/1992, de 7 de julio; y que, a pesar de que en su disposición final segunda expresamente consta que entrará en vigor el día 1 de marzo de 1994, hoy por hoy todavía tiene una vigencia parcial.

2. *Organización del nuevo Registro General*

El Registro General seguirá siendo único en todo el territorio nacional, según establece el Real Decreto que ahora analizamos.

Este nuevo Registro General estará integrado por:

— *Los Registros territoriales* (al menos uno por cada comunidad Autónoma o ciudad autónoma, como es el caso de Ceuta y Melilla): Serán establecidos y gestionados por las diferentes Comunidades o ciudades autónomas.

Sus funciones básicas serán las siguientes: a) La tramitación y resolución de los expedientes de inscripción o anotación. b) La práctica de las inscripciones que procedan. c) La certificación y emisión de notas informativas sobre los asientos registrales. d) La emisión de informes de carácter técnico en cuestiones referentes a las inscripciones cuando sean requeridas para ello por Juzgados, Tribunales u otros órganos o entidades públicas.

Como ya he apuntado anteriormente, el día 1 de mayo de 1996, entró en funcionamiento el Registro territorial de Cataluña, creado por Orden de 4 de abril de 1996.

Es previsible que los siguientes Registros territoriales que se creen sean el de la Región de Murcia y el de Andalucía, ya que estas dos Comunidades Autónomas tienen, desde 1995, publicados los Reales Decretos sobre trasposos de medios y servicios en materia ejecución de legislación de propiedad intelectual. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene publicado un Real Decreto en igual sentido desde diciembre de 1997.

— *El Registro Central*, formando parte de la Administración General del Estado y dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura, con competencia para sus funciones específicas en todo el territorio nacional.

Sus funciones básicas serán las siguientes: a) El diseño y gestión de la red de información del Registro General de la Propiedad Intelectual. b) La publicidad general, meramente informativa de los asientos de los Registros territoriales. c) La recepción de escritos y solicitudes que se dirijan a cualquier Registro territorial.

En este momento el Registrador General ejerce, transitoriamente, las funciones del Registrador Central.

— *La Comisión de Coordinación*: Se constituyó el 7 de abril de 1994; está integrada por un representante de cada Comunidad Autónoma, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla y por el titular del Registro Central que es el Secretario de la misma, funciones que, como he indicado anteriormente, ejerce, de forma transitoria, el Registrador General.

Este órgano colegiado tiene competencias, tanto de propuesta, como de resolución.

3. *Registro territorial competente*

Para la primera inscripción —o inmatriculación— de derechos de propiedad intelectual, será competente el Registro territorial correspondiente al domicilio del autor o titular. De haber varios, se citará al que figure en primer lugar.

Para las sucesivas inscripciones será competente el Registro territorial donde se hubiese efectuado la inscripción primera.

Para las personas o entidades carentes de domicilio en España y en lo que respecta a la primera inscripción, será competente el Registro territorial que les resulte más conveniente.

4. *Resolución de las solicitudes*

Conviene destacar que en este Reglamento que se comenta, —se indica que el Registrador territorial resolverá, de forma definitiva en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Es decir, que el plazo previsto en el Real Decreto 1584/1991 para resolver, se reduce a la mitad.

C. MEDIDAS A DESARROLLAR POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA EN RELACION AL NUEVO MODELO REGISTRAL

- Las necesarias para evitar que la situación de transitoriedad existente en la actualidad se prolongue en el tiempo.
- Aprovechar la autorización dada al gobierno para el desarrollo reglamentario del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, para conseguir una mejora en las deficiencias actualmente existentes en los Reglamentos del Registro de la Propiedad Intelectual.

